

dieron las Cortes por su decreto de 26 de Septiembre de 1811. Mi anhelo por aumentar el crédito de la Nación no se contentó con este paso, y desearo dar á los acreedores una prueba positiva de la protección que me merecen, consulté á la Junta provisional sobre los medios de realizar el decreto de las Cortes de 13 de Septiembre de 1813, por el cual se destinaron al pago de los réditos, que debían satisfacerse durante la guerra con Francia, y un año después, los bienes, derechos y acciones de la extinguida Inquisición, y de conformidad con lo expuesto por la misma Junta, he resuelto: 1.^o Que continúen aplicadas al pago de la deuda nacional todas las rentas, acciones y derechos de la extinguida Inquisición en toda la Monarquía, hasta que las próximas Cortes deliberen sobre el destino de estos bienes, como pertenecientes á la Nación, en los mismos términos é igual derecho que la Inquisición los posea. 2.^o Que se observe puntual y exactamente el decreto de las Cortes de 22 de Febrero de 1813, con las modificaciones siguientes, que hacen necesarias las circunstancias. Primera: que la época que fija el artículo 4.^o del mismo decreto en el día 26 de Enero de 1813 para la validación ó nulidad de las enajenaciones, sea y se entienda el 7 del corriente, en que me decidí á jurar la Constitución de la Monarquía. Segunda: que por ahora, y con arreglo al art. 7.^o del mismo decreto, entre desde luego el Crédito público en la administración y cuidado de las fincas, derechos y acciones de la extinguida Inquisición, valiéndose de las personas encargadas de ella por el tribunal. Tercera: el Crédito público, será obligado á cumplir los contratos pendientes, siempre que los arrendatarios ó inquilinos no falten por su parte á las condiciones estipuladas. Cuarta: que á todos los empleados del tribunal, cuyo sueldo pasa de 120 reales, se haga el descuento de que trata el artículo 12 del citado decreto de 22 de Febrero con sujeción á las órdenes vigentes, y á lo establecido en el de 30 de

Mayo de 1817, interin se acuerda por las Cortes constitucionales el sistema de Hacienda pública mas conforme al bienestar y felicidad de la Monarquía. Tendréislo entendido, y dispondréis lo necesario á su cumplimiento.—Esta rubricado.—En Palacio, á 20 de Marzo de 1820.—A D. Antonio Gonzalez Salmon.

NUMERO 207.

Real orden comunicada por el Ministerio de Hacienda.—Pecunia que á los jueces de primera instancia les corresponde tomar el conocimiento en los asuntos judiciales de la Hacienda pública.

(Publicarla en el mismo periódico y día que la anterior.)

Para que no sufran el menor entorpecimiento los asuntos contenciosos de la Hacienda pública, he venido en mandar, de acuerdo con la Junta provisional, que se ponga desde luego en planta el decreto de 13 de Septiembre de 1813, en el que con el fin de conformar la administración de justicia á los principios de la Constitución política de la Monarquía, sancionaron las Cortes extraordinarias que el conocimiento de los asuntos judiciales de la Hacienda pública correspondiese á los jueces de primera instancia, con las apelaciones á las Audiencias territoriales, cesando en él los subdelegados de rentas. Tendréislo entendido y dispondréis su cumplimiento. Palacio, 20 de Marzo de 1820.—A D. Antonio Gonzalez Salmon.

NUMERO 208.

Real orden concediendo nuevas gracias y declarando vigentes las antiguas á los labradores.

(Publicada leen el núm. 700 del Noticioso general de México, del viernes 14 de Julio de 1820.)

Descoso de proteger el derecho de propiedad entre mis amados súbditos, de pro